

**Legislación, manumisión y abolición. Consideraciones sobre su  
comportamiento en Santiago de Cuba (1868-1886)*****Legislation, manumission and abolition. Considerations about their  
behavior in Santiago de Cuba (1868-1886)*****Dra. C. María Cristina Hierrezuelo-Planas***cristina@uo.edu.cu***Universidad de Oriente, Santiago de Cuba****Resumen**

En este artículo se valora a través de ejemplos el comportamiento de la manumisión y emancipación de los esclavos en Santiago de Cuba en la etapa final de la esclavitud. Se explora cómo la abolición de la esclavitud se perfiló como una necesidad para los propios esclavistas necesitados de una fuerza de trabajo que se atemperara al desarrollo técnico alcanzado en la producción azucarera. En ese escenario el dilema lo constituyó el procedimiento a seguir en los términos de definir si la abolición sería de manera gratuita, indemnizada, total o gradual. La solución no fue inmediata y se afilió a la fórmula de indemnizada y gradual en tanto era la menos perjudicial para los propietarios. El primer paso fue dado con la aprobación de la ley de vientres libres en 1870, el segundo con la denominada ley del patronato en 1880 y el tercero y definitivo con la ley de cese del patronato en octubre de 1886. En esas decisiones legales incidieron dos acontecimientos importantes para la vida política de España y de Cuba como fueron respectivamente la Revolución Gloriosa y la Guerra de los Diez Años; la primera iniciada en el mes de septiembre y la segunda en el de octubre, ambas en 1868. Incidió igualmente la conjugación de intereses entre la burguesía esclavista de Cuba y personalidades políticas españolas que como fue el caso del general Francisco Serrano, regente del reino tras el destronamiento de Isabel II, estaba estrechamente vinculado a la producción azucarera de la Isla.

**Palabras clave:** Santiago de Cuba, Ley Moret, Ley del patronato, abolición gradual, abolición definitiva

**Abstract**

In this article the behavior of slave manumission in Santiago de Cuba in the final stage of slavery is assessed through examples. It explores how the abolition of slavery was outlined as a necessity for the slavers themselves in need of a workforce that was tempered to the technical development achieved in sugar production. In this scenario, the dilemma was the procedure to be followed in terms of defining whether the abolition would be free, compensated, total or gradual. The solution was not immediate and joined the indemnified and gradual formula as it was the least damaging for the owners. The first step was taken with the approval of the law of free wombs in July

1870, the second with the law of patronage in February 1880 and the third and final with the law of cessation of patronage in October 1886. In those decisions legal events affected two major events for the political life of Spain and Cuba as were respectively the Glorious Revolution and the Ten Years War; the first began in September and the second in October, both in 1868. It also affected the conjugation of interests between the slave-owning bourgeoisie of Cuba and Spanish political personalities as was the case of General Francisco Serrano, regent of the kingdom after the dethronement of Isabel II, was closely linked to the island's sugar production.

**Keywords:** Santiago de Cuba, Moret Law, Patronato Law, gradual abolition, definitive abolition

### **Introducción**

El 7 de octubre de 1886, María Cristina de Borbón, en nombre de su hijo, el rey Alfonso XIII, como reina regente del reino y a propuesta de Germán Gamazo, ministro de ultramar, decretó la supresión del patronato, establecido por la ley de 13 de febrero de 1880. La real orden ponía fin a siglos de esclavitud y era el resultado de un intenso proceso histórico en el cual intervinieron factores de orden interno y externo, y el accionar de países como Inglaterra, cuya ofensiva desatada primero contra el comercio de esclavos, y después a favor de la abolición de la esclavitud, incidió de manera directa en el comportamiento de los países esclavistas ante ambos asuntos.

España no quedó al margen de esa incidencia. Su gobierno firmó con el inglés los tratados de 1817 y 1835, y en 1845, emitió la ley de represión de la trata, decisiones todas dirigidas a poner fin a la compra y venta de africanos. El primero de los acuerdos suscritos, obligaba a Madrid a poner fin al comercio de negros en la costa de África, al norte del Ecuador, y abolirlo totalmente en sus dominios, a partir del 30 de mayo de 1820. (FRANCO, 1975, p. 107) A pesar de este convenio, de las negociaciones posteriores y de las campañas abolicionistas que ganaban espacio entre políticos e intelectuales de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica, lo prohibido se mantuvo de forma ilícita. Eso fue posible debido a la connivencia de funcionarios corruptos, entre los que figuraron algunos capitanes generales, que se beneficiaban con ese tráfico ilegal. Contribuyó igualmente la ayuda prestada por navieros del país norteamericano.

Al analizar este asunto el investigador José Luciano Franco, apoyado en estudios realizados a tal efecto, expuso cómo a partir de la década de 1830, Cuba y Brasil se convirtieron en los centros activos de la trata *interlope*: “Los traficantes clandestinos podían pasar, fácilmente y sin grandes costos, caravanas de esclavos de Brasil a Venezuela, [...] y de ahí a las pequeñas islas del Caribe; mientras que desde Cuba, se aprovisionaba de esclavos a las Grandes Antillas”. Y agregó seguidamente: “En este contrabando practicaban los armadores de Estados Unidos. Después de las rigurosas medidas tomadas por el gobierno británico para su represión [...], el comercio de esclavos se llevó a cabo principalmente en barcos de construcción americana, mandados por ciudadanos americanos, apoyados por el capital americano. La trata era el negocio del Norte y la esclavitud era el negocio del Sur. (FRANCO, 1975, p. 105)

Acontecimientos acaecidos en el decenio de 1860 introdujeron cambios significativos en ese proceder. En 1862, la firma del tratado Lyons-Servard entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, encaminado a impedir la continuación de la trata de africanos en naves de bandera norteamericana, fue un golpe devastador para la burguesía esclavista cubana, dedicada a la producción de azúcar, que vio seriamente amenazado el abastecimiento de fuerza de trabajo. En efecto, el número de esclavizados introducidos en la Isla, sufrió un fuerte descenso. En el trienio 1862-1863-1864, las cifras de los que ingresaron fueron de 15 000, 7 507 y 6 807, respectivamente. En ese escenario poco favorecedor para los intereses de los negreros, el 1<sup>ro</sup> de marzo de 1863, Abraham Lincoln, el presidente estadounidense, proclamó la abolición de la esclavitud, medida que a partir de 1865, hizo extensiva a todo el territorio de la nación nortea.

La drástica disminución de la entrada de esclavizados al territorio insular, junto con los requerimientos que de manera paulatina demandaba la producción del dulce grano, hizo que poco a poco, la idea de abolir la esclavitud y buscar otras fuentes suministradoras de fuerza de trabajo, comenzó a ser percibida como una solución razonable. Para los reformistas, la materialización de este hecho, implicaba la adopción de reformas políticas, como paso imprescindible para proceder a la sustitución de la mano de obra esclava por la libre asalariada.

En ese escenario el dilema lo constituyó el procedimiento a seguir en los términos de definir si la abolición sería de manera gratuita, indemnizada, total o gradual. La solución no fue inmediata y resultó tramada en un contexto marcado por sucesos de suma

trascendencia para la historia política de España y de Cuba. El primero de ellos lo constituyó el triunfo en septiembre de 1868, de la llamada Revolución de Septiembre o la Gloriosa. El movimiento, gestado por progresistas y demócratas que se encontraban en la Península y en otros países de Europa, se inició con la sublevación de la armada en el puerto de Cádiz, evento que tuvo como principal figura al general Juan Bautista Topete. El día 28 del citado mes, en el Puente de Alcolea, a 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se produjo un encuentro entre las fuerzas del gobierno, leales a Isabel II, provenientes de Madrid; y las de los sublevados, dirigidas por el general Francisco Serrano, marqués de la Torre, ex capitán general de la isla de Cuba. El combate fue favorable a los sublevados. Ante tal desenlace, la soberana, que se encontraba en San Sebastián, cruzó la frontera y se refugió en Francia. El general Serrano fue nombrado regente. Casado con la cubana María Antonia Domínguez, acaudalada propietaria, estaba estrechamente vinculado a los intereses de la burguesía azucarera de la Isla.

El segundo evento que en el orden cronológico marcó el escenario de la década de 1860, fue el alzamiento independentista ocurrido en la madrugada del 10 de octubre de 1868 en el ingenio Demajagua. La figura principal de ese levantamiento, el abogado bayamés Carlos Manuel de Céspedes, en un acto pleno de simbolismo, dio la libertad a sus esclavos, aunque este evento no entrañaba la idea de incumplir con el principio declarado por la Revolución de respeto a la propiedad, incluida lógicamente la detentada sobre los individuos en situación de esclavitud.

Es de notar que en el campo insurrecto la situación ante este asunto, era difícil y compleja, porque uno de los objetivos de los revolucionarios era unir a la burguesía esclavista en la lucha contra España. Este propósito llevaba implícito no lesionar los intereses económicos de ese sector, algunos de cuyos integrantes no vacilaban en premiar con la libertad a los esclavizados que en los momentos difíciles por los cuales atravesaba la Isla le demostraban su fidelidad. El 31 de julio de 1869, el hacendado don José Ramón de Villalón, libertó de forma gratuita a su esclavizado Agustín Río, criollo como de cuarenta a cincuenta años de edad. La causa de la manumisión era premiar lo bien que se había portado en la hacienda San Juan de Buena Vista, partido y cuartón central de la Enramada desde el principio de la insurrección. Aún cuando en la carta de ahorro no se explicitan las actividades ejecutadas por el siervo, es de pensar que éstas

estuvieron dirigidas a proteger y defender las propiedades del amo de cualquier acción proveniente de los revolucionarios.

La radicalización del movimiento, marcó la posición a ser tomada por los insurrectos: esta no podía ser otra que la abolición total. En el camino que condujo a ese momento de gloria, destaca la adopción de disposiciones como la orden del 29 de octubre, el bando del 12 de noviembre, y el decreto del 27 de diciembre del propio año 1868. Seis meses después de iniciada la contienda por la independencia, el 10 de abril de 1869, se realizó la Asamblea de Guáimaro. En el artículo 24 fue consignado que “todos los habitantes de la República son absolutamente libres”. Tras un retroceso tan evidente como la aprobación del Reglamento de Libertos el 5 de julio de 1869, que en la práctica mantenía la institución esclavista y preservaba los intereses de los hacendados, finalmente, el 25 de diciembre de 1870, Carlos Manuel de Céspedes, presidente de la República en Armas, firmó el documento donde de manera definitiva, la Revolución fijó su posición ante el asunto de la abolición de la esclavitud en la Isla. En una de sus partes señaló:

El timbre más glorioso de nuestra Revolución a los ojos del mundo entero ha sido la emancipación de los esclavos que, no encontrándose en plena capacidad durante los primeros tiempos de su libertad para ejercer ciertas funciones, á causa de la ignorancia en que el despotismo español los mantenía, habían sido dedicados, casi exclusivamente al servicio doméstico y al de la agricultura por medio de consignaciones forzosas; el transcurso de dos años ante el espectáculo de nuestras libertades, es suficiente para considerarlos ya regenerados, y franquearles toda la independencia, á que con sujeción á las leyes, tienen indispensable derecho. Se hace, pues, necesario completar su redención, si es posible emplear esta frase, y a la vez emanciparnos de sus servicios forzosos. Por ello es que, desde la publicación de esta circular, cesarán esas consignaciones, quedando en libertad de prestarlos como lo tengan por conveniente y consagrarse como los demás ciudadanos á aquellas ocupaciones, que según su actitud, les sean más propias en cualquiera de las esferas de actividad de la República, (...) (TORRES-CUEVAS y REYES, 1986, p. 241)

La Gloriosa en España con un complejo entramado social y político marcado por los intereses personales de individuos como Francisco Serrano y Domingo Dulce, igualmente ex capitán general de Cuba, casado con la rica heredera cubana Elena Martín de Molina, condesa de Santovenia, y el alzamiento en Demajagua, incidieron en la aprobación el 4 de julio de 1870 de la ley de vientres libres, conocida generalmente con el primer apellido de Segismundo Moret y Prendergast, quien desde su posición de ministro de ultramar, la propuso y logró su aprobación. La ley propiciaba la abolición

gradual. Daba la libertad a los hijos de madres esclavas, nacidos después del 17 de septiembre de 1868 y de la fecha de promulgación de la ley en adelante, así como a los esclavos mayores de 60 años mediante una proyección análoga. Los que habían llegado a esa edad en un momento posterior al mencionado 17 de septiembre, y los que llegaran después de promulgada la ley Moret, serían beneficiados.

Concerniente a la libertad de los niños nacidos de madre esclava, establecía que los venidos al mundo desde el 17 de septiembre hasta el 4 de julio de 1870, serían adquiridos por el estado, quien abonaría a sus dueños la cantidad de 125 pesetas, cifra equivalente a 25 pesos. Los niños que por ministerio de la ley nacían libres, quedarían bajo el patronato de los dueños de la madre, hasta que llegaran a la edad de 22 años. En ese nuevo escenario, cumplir 18 años marcaba un antes y un después en la vida económica de estos individuos. Antes de llegar a esa edad, el patrono tenía la potestad de aprovecharse de su trabajo sin remuneración alguna; a partir del momento en que la cumplían, recibirían una remuneración equivalente a la mitad del jornal devengado por un hombre libre. La otra mitad era retenida por la Junta protectora de los libertos; cuya naturaleza y funcionamiento quedaron recogidos en el artículo 1º del Reglamento implementado para la aplicación de la Ley. En el artículo 6º, aspecto 2º pautaba como una de sus atribuciones, percibir la mitad del jornal de los libertos destinada a la formación del peculio de éstos. (TORRES-CUEVAS y REYES, 1986, p. 231)

### **Metodología empleada**

La metodología empleada consistió en el análisis de bibliografía especializada cuyos autores son reconocidos especialistas en el tema de la esclavitud, la manumisión y la abolición de la esclavitud en Cuba. Igualmente se procedió a la revisión y estudio de diversos documentos de archivo que versan sobre el asunto tratado muchos de los cuales son inéditos y validan las valoraciones que se hacen sobre la temática estudiada.

### **Desarrollo**

La Ley Moret ha sido sometida a múltiples análisis, de los cuales han resultado diversos juicios sobre ella entre los que figuran: “un primer paso a la abolición de la esclavitud”, (TORRES-CUEVAS y REYES, 1986, p. 226); “ley abolicionista que encubría los intereses esclavistas”. (BARCIA, 1987, p. 189); y también: “El punto culminante de la legislación española en la isla de Cuba con respecto a la libertad...”. (PERERA DIAZ y

MERIÑO FUENTES, 2009, p. 67). En mayor o menor grado, esas consideraciones y otras muchas, emitidas por investigadores y estudiosos de la esclavitud en Cuba, subrayan las limitaciones de la citada ley. Sin embargo, sería iluso negar que como ha sugerido Rebecca J. Scott y han citado Aisnara Perera Díaz y María de los Ángeles Meriño Fuentes, la Ley de vientres libres: “Proveía una palanca –débil, frágil, rudimentaria- que permitía a algunos esclavos ejercer influencia sobre su condición o la de sus parientes (...)”. (PERERA DÍAZ y MERIÑO FUENTES, 2009, p. 68).

Verdaderamente después de septiembre de 1870, cuando fue publicada en Cuba, y tras finalizar las argucias tramadas por los hacendados propietarios de esclavos y las autoridades coloniales para trastornar su aplicación efectiva en el quehacer cotidiano, no puede negarse que las madres esclavas tuvieran la posibilidad de negociar con sus amos fórmulas que las condujeran a la asunción del patronato de sus hijos nacidos libres. Pensar de otra manera sería ignorar que entre los esclavistas y sus propiedades humanas existían relaciones sustentadas en factores tales como la convivencia de varios años que posibilitaban llegar a determinados acuerdos sin que esto lesionara la autoridad del señor.

La primera condición que las esclavas debían cumplir era la de alcanzar la condición de libres ya fuera mediante la compra de la libertad, o por vía de la manumisión graciosa. Casos como los dos siguientes, registrados en los protocolos notariales número 122 y 126 que se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba, ilustran lo dicho. En 1872, don Luis Malleuve, libertó graciosamente a su esclava María del Carmen, morena criolla de 35 años de edad, y le cedió y traspasó el patronato de su hija Rosa de Lima. En 1875 María Caridad Carón, dio libertad a Salomé por la suma de 400 pesos. Igualmente le cedió y traspasó el patronato de su hija Victorina, chinita de tres años. Tanto en lo relativo a Rosa de Lima como a Victorina se especifica que eran libres según las disposiciones vigentes lo que significa que habían nacido después del 17 de septiembre de 1868.

Un aspecto a ser señalado es que en el contexto de la sociedad colonial, los beneficiados por la ley de vientres libres fueron identificados de una manera muy peculiar. Don Fernando Ortiz señala que, según Bacardí, a los esclavos viejos e inútiles, arrojados a la calle, libertos, por decreto del Gobierno Provisional de Madrid se les llamó alcoleas, mientras que a los nacidos después de la indicada fecha de 1868, se les denominó

alcoleistas. Como se observa, y así lo reconoce el famoso investigador cubano, ambos términos aluden de manera directa a la batalla del Puente de Alcolea de la cual se habló en párrafos anteriores, en la que el triunfo de las fuerzas insurgentes posibilitó el destronamiento de Isabel II y el encumbramiento de generales como Francisco Serrano y Domingo Dulce, fuertemente vinculados a los intereses esclavistas de Cuba.

Sin negar la validez e importancia de lo expuesto por Ortiz y por Bacardí, existen evidencias de que los dos términos citados eran utilizados indistintamente para identificar a todos los siervos legalmente beneficiados. En el Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba, fondo juzgado de primera instancia, legajo número 733, expediente 4, figura un documento de fecha 8 de mayo de 1874, que se corresponde con lo dicho. Recoge la relación nominal de los esclavos pertenecientes a la dotación del ingenio La Cubana, ubicado en el cuartón de Morón, partido de Jutinicú, propiedad de la sucesión del catalán José Planas. Bajo la condición “De Alcolea”, aparecen registrados, Antonio, de sesenta años, ciego; y los niños y niñas Emilio, Máximo, José, Leopoldina, Rafael, Petronila, Belén y Angelina, todos de pecho, e hijos respectivamente de las esclavas Anastasia, Celestina, Desideria, Florencia, Amelia, Cristina, Constancia y Virginia. Las madres todas eran criollas, y sus edades estaban comprendidas entre 20 y 35 años de edad.

La revisión de otro documento de fecha 3 de junio de 1880, atesorado igualmente en el Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba, en el fondo protocolos notariales, posibilita constatar el tratamiento que a ambos grupos de beneficiados le fue dado en el ingenio San José de los Ramos, ubicado en el partido de Jutinicú, cuartón de Rojas y propiedad de doña Mariana de la Torre Griñán. En este caso el término utilizado fue el de “Alcoleistas”. Aparecen registradas las niñas Tomasa y Nestora, que para entonces tenían 10 años de edad, y los ancianos Bernabé y Guadalupe, ambos de 70 años, y declarados inútiles. Un aspecto que llama la atención es la presencia de dos sexagenarias que realizaban determinadas labores. Fue el caso de Teresa, de 65 años, encargada de cuidar a los muchachos e Isidora, de 60, quien se ocupaba como partera y enfermera.

En los dos últimos casos, se trataba sin dudas de la aplicación del artículo 14 de la ley Moret, dirigido a prever que los esclavizados de sesenta o más años de edad, podrían



permanecer en la casa de sus dueños, quienes en tales casos adquirirían el carácter de patronos y la potestad de retribuirlos o no. Si el esclavizado estaba físicamente imposibilitado para mantenerse por sí, los amos tendrían: “la obligación de alimentarlos, vestirlos y asistirlos en sus enfermedades, como también el derecho de ocuparlos en trabajos adecuados a su estado”. (PICHARDO, 1971, p. 385)

La guerra de los Diez Años, tuvo otras implicaciones en el fenómeno de la manumisión en Cuba. El conflicto creó inseguridades en la población en general, entre los hacendados en particular, muchos de los cuales ante los destrozos causados por la aplicación de la tea incendiaria, tomaron el camino de la emigración y buscaron refugio en Europa, los Estados Unidos o las islas del Caribe, países todos en los cuales la esclavitud había sido abolida y todo esclavizado que llegara a esos territorios se convertía inmediatamente en una persona libre. Al analizar este asunto el investigador alemán Jochen Kemner considera que debido a esas circunstancias, para los esclavistas que emigraban: “[...] no existía ninguna posibilidad para llevarse consigo sus propiedades móviles en forma de esclavos sin perderlos”. Y a continuación agrega que: “Quien no pudo vender sus esclavos en el mercado, prefirió negociar con ellos las condiciones de su liberación, o los dejó libres sin compensación alguna”. (KEMNER, 2008, p. 81)

Las tablas estadísticas contenidas en el artículo, corroboran que efectivamente hubo un significativo número de propietarios que otorgaron libertad graciosa a sus esclavizados, es decir, por su voluntad, y sin recibir pago alguno, aunque los saldos generales resultaron abrumadoramente favorables a las libertades pagadas. El año 1869 se reveló como el único en el cual el número de las gratuitas fue superior con 105 frente a 93; mientras que 1870 fue el de mayor cantidad de manumisiones con 577; de ellas, 445 mediante pago. (KEMNER, 2008, p. 80).

Hay que expresar igualmente que esa decisión de los emigrados de manumitir graciosamente a sus cautivos trascendió el decenio glorioso 1868-1878, cuando la Isla, afrontaba los embates de la llamada Guerra Grande. Un ejemplo significativo fue el protagonizado por el hacendado don José Antonio Milanés y Céspedes, natural de Bayamo, vecino de la isla de Jamaica, accidentalmente en la ciudad santiaguera. El 13 de mayo de 1879, ante el escribano Orestes Ferro, llevó a escritura pública, la propuesta hecha algún tiempo atrás a cuatro de sus esclavos, los cuales constituían una familia, de

concederles la libertad. Se trataba de los morenos Miguel Suárez y Rafaela Suárez, su esposa, de cincuenta y dos y cuarenta años de edad respectivamente; y sus dos hijos Esperanza y Gilberto Milanés; la primera de diez y siete años de edad y el segundo, de quince. Resulta también de suma pertinencia señalar que contrariamente a lo aseverado por el estudioso germano en lo concerniente a la imposibilidad de los esclavistas de llevarse a sus propiedades humanas sin perderlas, hay que decir que hubo propietarios que sí trasladaron con ellos a sus esclavizados. La fórmula encontrada fue manumitirlos de manera graciosa, pero con la condición de que los acompañaran al nuevo destino, donde lógicamente estarían a su servicio.

El cómputo de los ahorros localizados en los protocolos notariales muestra que entre los años 1869 y 1876, a 38 esclavizados les fue dada la libertad, pero su disfrute fue condicionado a viajar con sus amos o reunirse con ellos en distintas partes del orbe. Los destinos fueron: España, Francia, Estados Unidos, Puerto Rico, Jamaica y Martinica. Entre las condiciones declaradas figuraban: acompañar al amo y permanecer a su servicio, pasar al abrigo de los amos y estar con los amos mientras estuvieran fuera de la Isla. De los beneficiados 23 eran hembras y 15, varones. Concerniente a las edades, un aspecto que llama la atención es la presencia de niños de 10, 9, 8, 7, 6 y 5 años.

Las libertades así concedidas constituyeron una artimaña, una argucia empleada por los esclavistas para prolongar el estado servil de sus propiedades humanas. En los nuevos escenarios, esos “libertos” se mantendrían al servicio de sus amos, con la incertidumbre de no saber en qué momento podrían disfrutar la gracia otorgada de ser libres. Un aspecto que se agrava de que, tal como se percibe en la abrumadora mayoría de las cartas de ahorro localizadas, el tiempo de servicio no aparece definido. Lo dicho queda corporizado en el comportamiento del francés Juan Rancole. Libertó a Javier, Venus y Rufino, de 25, 5 y 11 años de edad, respectivamente; a los dos primeros, en 1870 y al tercero en 1876. La condición impuesta en los tres casos fue la de llevarlos con él a Francia; pero en las escrituras, no dejó recogida ninguna información en cuanto a aspectos tan importantes como el tiempo que permanecerían en aquel país, y las condiciones en cuanto a un posible retorno.

En oportunidades la situación era distinta. Los elementos diseñados por los amos para conceder la libertad se revelaban como garantía de un beneficio efectivo para el

agraciado. Fue el caso de la esclava Tomasa, negra criolla de 35 años de edad. Según se recoge en el folio 113 del protocolo notarial número 553, el 28 de marzo de 1870, don Jorge B. Calzado procedió a manumitirla, con la condición de que lo acompañara y sirviera a él y a su familia mientras se encontraran ausentes de la Isla. El otorgante se obligaba a volverla a traer a la ciudad santiaguera si fuera del gusto de la liberta, pagándole sus pasajes y sosteniéndola en sus necesidades mientras estuviera a su servicio.

No han sido encontradas pruebas de que la manumisión de Tomasa, se consumó de la manera en que fue expuesta, por el amo. Puede pensarse que efectivamente todo transcurrió tal como fue prometido. No obstante, hay que decir lo siguiente: en la escritura de manumisión no existe anotación al margen, donde el notario certificara haber entregado a la beneficiada una copia en pliego de pobres, procedimiento usual en caso de manumisiones. Esta circunstancia es suficiente para considerar que la liberta carecía del documento que por una parte la acreditara como tal y por otra, obligara al amo a cumplir con las condiciones propuestas. La fragilidad de las libertades así concedidas y el grado de indefensión en el cual se encontraban los manumisos que en situaciones similares viajaban al exterior, permiten defender la idea de que efectivamente, la libertad otorgada con la condición de trasladarse fuera de la Isla, fue una patraña utilizada por los esclavistas para prolongar la esclavitud de esos libertos.

Entre los emigrados santiagueros que llevaron consigo a sus esclavizados se encontraba Antonio Antomarchi, propietario de las haciendas San Antonio y Aurora, ubicadas respectivamente en los cuarterones de Hongolosongo y Brazo de Cauto, y dedicadas al cultivo de café y cacao. Su caso reviste características que lo hacen sumamente interesante. Radicado en Mayagüez, en la isla de Puerto Rico; en septiembre de 1873, mediante su apoderado don José Agustín Plano, procedió a la manumisión de 14 esclavos, 11 de los cuales pertenecían a la dotación del antes mencionado cafetal San Antonio. A todos les concedió la libertad con la condición de desplazarse hasta el sitio donde él se encontraba.

La edad de los manumisos denota que se encontraban en plena capacidad de trabajo. Sólo uno de ellos, una mujer llamada Isabel, tenía 47 años. De los 13 restantes, había ocho cuyas edades se encontraban entre 19 y 27 años; y cinco, entre cinco y 14. Un aspecto a destacar es que dos de estas libertas, Carlota y Cesarea, debían trasladarse con

sus pequeños hijos-Pedro Alcántara y Lucía-, de 15 meses y tres años de nacidos, respectivamente, quienes por su edad y en total correspondencia con lo estipulado por la Ley Moret eran libres. Pero Antonio Antomarchi conservaba el patronato de ambos y por tanto disponía del derecho de trasladarlos hasta Puerto Rico. El Reglamento aprobado el 5 de agosto de 1872 para la aplicación de la ley de vientres libres, establecía en el artículo 40 que ni la transmisión ni la renuncia al patronato, podrían hacerse separando de su amo al liberto menor de 14 años. (TORRES-CUEVAS y REYES, 1986, p. 238)

En la carta de manumisión quedó recogido que los manumisos pasarían a la isla caribeña bajo el protectorado legal establecido en aquel territorio por la disposición superior de emancipación de la esclavitud. En efecto en un contexto político de suma complejidad, con la ocurrencia de sucesos tales como la renuncia al trono del monarca Amadeo de Saboya, y la proclamación el 11 de febrero de 1873, de la primera república española, el 22 de marzo del citado año, las Cortes habían procedido a aprobar la abolición de la esclavitud en Borinquen. Pero la libertad concedida no fue absoluta. Con el objetivo de no privar abruptamente a los hacendados de la fuerza de trabajo de la cual disponían, en el artículo 2º de los ocho que componían la ley, se estableció que los libertos quedaban obligados a celebrar contratos con quienes en el momento de la proclamación de la ley, eran sus propietarios. También podrían establecerlo con otras personas o con el estado, pero en todos los casos, por un tiempo no menor de tres años. Esas circunstancias permiten conjeturar que los hombres, mujeres e infantes agraciados por Antomarchi pasarían a un escenario cuyas circunstancias económicas, sociales y jurídicas eran diferentes a las existentes en Cuba, pero no impedían que en la práctica continuaran siendo explotados por su otrora dueño, quien desde la posición de patrón, procedería a contratarlos.

En otro orden de valoraciones acerca de la abolición de la esclavitud, es sabido que ese objetivo no se alcanzó en el curso de la Guerra Grande, pero se mantuvo como venerada aspiración de quienes, a pesar del acuerdo del Zanjón, no renunciaban al ideal abolicionista e independentista. Un aspecto a señalar es que en las condiciones posteriores al fin de la guerra, muchos esclavos encontraron en la evasión la vía expedita para alcanzar el disfrute de la libertad. En un protocolo notarial del año 1880,

se recoge que cuando la sucesión del fallecido hacendado francés Juan Rancole, citado en párrafos anteriores, procedió a asentar la venta del ingenio titulado Los Caños, situado en el distrito y jurisdicción de Guantánamo, partido de Yateras, cuartón de Arroyo Hondo, declaró que en la posesión existían 23 alcoleistas y 147 esclavos de los cuales había cincuenta y tres prófugos.

De manera que resulta apropiado compartir el criterio de que “la existencia de la esclavitud en Cuba, después de diez años de guerra, seguía siendo un fermento revolucionario. Ello explica la premura con que fue dictada la ley de supuesta abolición de la esclavitud de 1880”. (TORRES-CUEVAS y REYES, 1986, p. 247). Denominada oficialmente Ley de abolición de la esclavitud, conocida generalmente como ley del patronato, aprobada el 13 de febrero de 1880, en el artículo primero establecía el cese del estado de esclavitud en la isla de Cuba e instituía el patronato: los amos se convertían en patronos y los esclavos en patrocinados. El artículo segundo estaba dirigido a conservar el derecho del amo a utilizar la fuerza de trabajo de los patrocinados; y el cuarto por su parte, conservaba la obligación de mantenerlos, vestirlos y asistirlos en sus enfermedades. (PICHARDO, 1973, pp. 414-415)

Al igual que la ley de vientres libres, la del patronato ha sido sometida a análisis por los investigadores, quienes coinciden en afirmar que fue una forma encubierta de mantener la esclavitud. En las nuevas circunstancias, los patrocinados mantuvieron la calidad de propiedad humana que encerraba un valor monetario asunto que se revela en documentos de la época como son los testamentos. El 1º de diciembre de 1881, don Tomás Tomashevich, natural de Boque de Cátaro, departamento de Dalmacia, en Austria, dictó el suyo ante el escribano Pedro Secundino Silva. Entre los bienes que declaró, incluyó cuatro patrocinados nombrados Félix, Teresa, Caridad y Julio. En la cláusula séptima indicó ser su voluntad legar la libertad a la referida Teresa, negra criolla como de cuarenta y un años de edad, y también la suma de cien pesos oro. Ambos legados perseguían el objetivo de remunerar los buenos servicios y la eficacia con que le asistía en su ancianidad y enfermedad. Finalmente expuso que la cláusula le servía a la patrocinada de título en forma “en su oportunidad”. El señor Tomasevich falleció el 19 de marzo de 1882. En la cuenta divisoria y adjudicación de sus bienes, registrados el 26 de junio del citado año en la propia escribanía de don Pedro Secundino

Silva, los patrocinados Félix y Caridad fueron “apreciados” en 250 pesos y, adjudicados a don Elías, uno de los cuatro hijos del difunto.

El testamento de doña Rita Armendi, ordenado el 15 de agosto de 1882, manifiesta una situación similar. Una de las disposiciones estuvo dirigida a que el negrito Juan, su patrocinado, quedara coartado en cuatro onzas españolas, o sea en 68 pesos. Indicó también que la negrita nombrada Ángela, su patrocinada, quedara libre de toda servidumbre, sirviéndole la cláusula de título en forma “en su oportunidad”. Esta expresión aparece de manera recurrente en las memorias testamentarias cuyos otorgantes como fueron los casos de Rita Armendi y Tomás Tomashevich, decidían manumitir de manera graciosa a alguno de sus patrocinados, y puede ser interpretada como una referencia al fallecimiento del testador.

El tratamiento dado a los patrocinados por los dos testadores referidos y los albaceas del primero de ellos no dista mucho del que recibían los esclavos antes de la aprobación de la ley del patronato. La única diferencia perceptible es la sustitución del término esclavo por el de patrocinados; al igual que a los primeros, estos últimos son incluidos en la relación de bienes y tasados, aunque en el nuevo escenario se empleaba el término apreciados. A partir de ese valor estimado, eran adjudicados para completar el monto de la herencia correspondiente a los herederos.

### **Conclusiones**

En 1868, eventos como la Gloriosa en España y la Guerra de los Diez Años en Cuba, compulsaron al gobierno colonial a adoptar normativas que como la ley Moret y la del patronato, advertían que más temprano que tarde, aunque de manera gradual, la esclavitud debía ser abolida en la isla antillana. Factores económicos, sociales y tecnológicos, lo exigían. La documentación de la época revela que en el caso de Santiago de Cuba, ante esas disposiciones legales los esclavistas acudieron a diversas fórmulas que en la práctica limitaban las posibilidades de los esclavos de acceder a la libertad en tanto prolongaban su servidumbre mediante acciones tales como el otorgamiento de libertades condicionadas. Fue constatado también que por razones objetivas como era la preeminencia del trabajo esclavo, la ley del patronato significó que los patrocinados recibieran un tratamiento que no distaba del que se daba a los esclavos en tanto mantenían como estos la condición de propiedades humanas con un

valor en dinero. Finalmente es de señalar como un elemento importante que la adopción de esas normativas no impidió que ciertos esclavos, cansados de vivir en cautiverio, encontraran en la huida la vía perfecta para disfrutar la libertad que las leyes demoraban en concederles.

### Referencias Bibliográficas

1. Barcia, María del Carmen (1987): *Burguesía esclavista y abolición*. Ed. de Ciencias Sociales, La Habana.
2. Franco, José Luciano (1975): *La diáspora africana en el Nuevo Mundo*. Ed. de Ciencias Sociales, La Habana.
3. Kemner, Jochen: “Libres al fin. Cartas de libertad otorgadas en Santiago de Cuba en el último tramo de la esclavitud”, en *Del Caribe*, Santiago de Cuba, no. 52, 2008.
4. Torres-Cuevas, Eduardo y Eusebio Reyes (1986): *Esclavitud y Sociedad. Notas y documentos para la historia de la esclavitud negra en Cuba*. Ed. De Ciencias Sociales, La Habana.
5. Torres-Cuevas, Eduardo y Oscar Loyola Vega (2001): *Historia de Cuba 1492-1898. Formación y Liberación de la Nación*. Ed. Pueblo y Educación, La Habana.
6. Ubieto, Antonio, Juan Reglá, José María Jover y Carlos Seco (1970): *Introducción a la Historia de España*. 2da edición, Editorial Teide, Barcelona.
7. Perera Díaz, Aisnara y María de los Ángeles Meriño Fuentes (2009): *Para librarse de lazos, antes buenas familias que buenos brazos. Apuntes sobre la manumisión en Cuba*. Ed. Oriente, Santiago de Cuba.
8. Pichardo, Hortensia (1973): *Documentos para la Historia*. Tomo I, Segunda Edición, Ed. de Ciencias Sociales, La Habana.